



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

SENTENCIA DEFINITIVA

EXPEDIENTE NRO: 81800/2015

AUTOS: “HOSPITAL ALEMAN ASOCIACION CIVIL c/ MINISTERIO DE TRABAJO EMP. Y SEGURIDAD SCIAL s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Buenos Aires,

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que llegan las presentes actuaciones a esta Alzada, en virtud del recurso de apelación obrante a fs. 189/205 contra la resolución D.R.F N° 26616 que no hizo lugar a la impugnación administrativa deducida contra la Resolución D.R.F N° 1674/2012 obrante a fs. 162/168 que impuso una multa al quejoso, en virtud de las infracciones cometidas al artículo agregado sin número a continuación del artículo 40 de la ley 11.683.

Que notificada de ello, se hizo saber a la rubrada, que la resolución en cuestión agotaba la instancia administrativa y que aquella podía ser recurrida por la vía prevista en el art. 10 inc. b) de la Resolución METySS N° 655/05 y sus modif.

Que a fs.222 el organismo ministerial ordenó la remisión de los presentes obrados a este Tribunal sin informar si el contribuyente depositó la suma reclamada.

Que sin perjuicio de ello, surge de las actuaciones que el nombrado cumplió con el requisito del pago previo de la multa impuesta, atento que a fs.206 obra la boleta de depósito correspondiente a la deuda que se le imputa. (Conf. art. 15 de la ley 18820).

Que corresponde en este estado verificar los demás requisitos de admisibilidad de recurso intentado.

Que tal como la norma lo prevé, el recurso deberá sujetarse a la forma, modo y plazos fijados en el artículo 9° de la Ley N° 23.473 y sus modificatorias. Atento ello, y a tenor de la reforma introducida por la ley 26.063, deberá presentarse con firma de letrado y con expresión de agravios ante el mismo organismo administrativo que dictó la medida y dentro de los treinta (30) días de notificada si el recurrente se domicilia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de los cuarenta y cinco (45) días si se domicilia en el interior del país.

Que conforme se constata en autos, el remedio intentado contiene firma de letrado, domicilio electrónico y fue presentado en término.

Que el presente se origina con el acta de relevamiento obrante a fs. 1 y las planillas de relevamiento de trabajadores de fs. 2/19 y la verificación de altas y bajas realizadas por el organismo de las que surgiría personal sin la debida registración.

Que ante la notificación al presunto evasor, el Hospital en su escrito de descargo, hace constar que las personas relevadas actúan en calidad de profesionales independientes vinculados al Hospital perciben los honorarios correspondientes a las prácticas que efectivamente realizan y tales honorarios los perciben en la medida en que hubiese mediado un pago efectivo por parte del beneficiario de las prestaciones o en su defecto de la obra social, entidad de medicina prepaga o seguro médico según quien sea el que le brinde la cobertura a los pacientes. Es decir, que el Hospital no es quien paga los honorarios sino que actúa como agente de cobro. Por otra parte, el médico que se encontraba realizando tareas en carácter de residente, fue debidamente registrado luego del relevamiento.

Que los argumentos expuestos precedentemente fueron reiterados tanto en el recurso administrativo como en el de apelación en tratamiento.

Que al momento de evaluar la defensa opuesta, el organismo invoca la presunción consagrada en el art. 23 de la ley 20.744, destacando que en el acto inspectivo las personas se encontraban desarrollando tareas pero cabe señalar en este punto que dichos agentes indicaron días y horarios dispares, es decir no horarios fijos y no indicaron fechas de ingreso ni remuneración.



Que al respecto ha de señalarse, en primer lugar, que la presunción del art. 23 de la L.C.T. no es operativa cuando quien alega la condición de trabajador lo hace respecto de un profesional universitario, ya que en la hipótesis no se dan las razones que permitan erigir el contrato de trabajo como modelo normal de contratación, desde que tales profesionales pueden comprometer sus servicios tanto a través de contratos de trabajo, como locación de obra, como de mandato, y ello determina la inexistencia de un modelo al que remitirse en los casos ambiguos (cfr. C.N.A.T., Sala VI, sent. del 26.07.91, "Zareg, Alcira c/ S.B.A.").

Que en tales condiciones, cuando de profesiones liberales se trata, la determinación de la existencia de relación de dependencia dependerá de las alternativas probatorias disponibles, no resultando acertado partir de premisas fijas, sino del análisis de la particular situación en cada caso, afirmar que existe relación de dependencia y subordinación con el supuesto empleador.

Que en este sentido, no ha de perderse de vista que el actuar de la administración no puede subsumirse en una mera revisión contable, pues ello importaría una inversión en la carga de la prueba (cfr. Wassner, Roberto, "Trámites, procedimientos, recursos administrativos y judiciales en previsión social, pág. 104 y ss.). La presunción "juris tantum" de la existencia de la relación laboral en sentido estricto, como tal, debe verificarse al extremo, pues ello fundará una decisión administrativa de neto corte punitivo. En ese actuar debe imperar el principio de verdad material o real, llevando a cabo las medidas que se consideren conducentes para incursionar a fondo en la realidad económica analizada (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 29.05.97, "Cooperativa de Provisión para Puesteros La Armonía").

Que de las constancias obrantes en autos, no surge que el organismo haya verificado fehacientemente si existía un poder disciplinario del contribuyente respecto de los agentes relevados y tampoco cómo era el desenvolvimiento efectivo de los profesionales o la existencia de servicios prestados en otros ámbitos. Así, la escasa o nula prueba producida en sede administrativa y basándonos estrictamente en las constancias obrantes en autos, consideramos que corresponde revocar la resolución administrativa cuestionada y ordenar la devolución del depósito ingresado en cumplimiento de los arts. 9 de la ley 23.473, 15 de la ley 18.820 y 39 bis del Decreto Ley 1285/58, con más el interés que resulte de aplicar la tasa pasiva para el uso de la justicia que publica el BCRA.

Que conforme se resuelve el presente, exime al Tribunal del tratamiento de las restantes cuestiones alegadas que no han sido expresamente abordadas. Ello es así en el marco de la conocida doctrina en virtud de la cual "los jueces no están obligados a seguir y decidir todas las alegaciones de las partes, sino sólo a tomar en cuenta lo que estiman pertinente para la correcta solución del litigio", (cfr. "Tolosa, Juan C. c/Compañía Argentina de Televisión S.A.", fallado el 30.4.74, pub. L.L. T. 155, pág. 750, nro. 385). En este sentido, se exime al juzgador de tratar todas las cuestiones expuestas por los litigantes y de analizar los argumentos que, a su juicio, no sean decisivos para decisión de la causa. (Fallos 272:225; 274:113; y causa "Wiater c/Ministerio de Economía", L.L. 1998AA, pág. 281, y más recientemente Fallos 325:1922, entre otros).

Que por ello, el Tribunal **RESUELVE** 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y revocar la resolución cuestionada; 2) Ordenar la devolución de las sumas depositada en cumplimiento del requisito de pago previo con más el interés que surja de aplicar la tasa pasiva del BCRA; y 3) Sin costas en la Alzada (art. 68 del C.P.C.C.N.).

Protocolícese, notifíquese, cúmplase con la comunicación dispuesta por la CSJN en la Acordada 15/13 (p.4 y conc.) y, oportunamente, remítase.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA VOCALIA 1 SE ENCUENTRA VACANTE (ART. 109 del R.J.N)

